VIII Jornadas de Historia

Centro de Estudios de la Revolución
Mexicana "Lázaro Cárdenas"

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

**LA REVOLUCION
A FUTURO**

Jiquilpan de Juárez, Mich.
30 de agosto de 1985.

1. Intentaré en este trabajo, presentar hacia donde debiera evolucionar el país en el futuro inmediato, para dar cumplimiento y satisfacción a los objetivos de la Revolución Mexicana, para actualizar las que pudieran ser metas del movimiento social que se inició a principios de este siglo, para buscar así su continuidad en nuestro desarrollo político, económico y social.

Haré mención de algunos de los antecedentes inmediatos, directos, de la Revolución Mexicana, y algunas referencias a las corrientes de pensamiento y de la movilización politicosocial que encontraron continuidad en estos antecedentes y en las ideas y acciones desarrolladas después del estallido mismo de la Revolución.

Parto de aceptar que la Revolución Mexicana, como movimiento politicosocial, comienza el 20 de noviembre de 1910.

Por otro lado, mucho se ha discutido si la Revolución Mexicana concluye con la promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 1917; o al finalizar su fase armada, en 1917, 1920 ó 1929; o en el período presidencial de Lázaro Cárdenas, al decretarse la expropiación de las empresas petroleras el 18 de marzo de 1938 o al concluir su mandato el 30 de noviembre de 1940; o si aún se mantiene el impulso politicosocial que se iniciara en 1910, al través de "los gobiernos emanados de la Revolución".

Dejo de lado esta discusión. Considero que lo más importante en este caso es analizar la vigencia de las demandas de este movimiento, y si su satisfacción sería o no condición para que el país evolucionara en el sentido en que la Revolución pretendió impulsarlo, accediendo así incluso, a formas de organización política, económica y social no necesariamente previstas por los revolucionarios en 1910 y 1917, pero si enunciadas por quienes continuaron militando dentro del movimiento social en sus etapas de consolidación y edificación.

Habrá que considerar, también, que entre los precursores y antecedentes, en las distintas fases de la Revolución y hasta nuestros días, han habido planteamientos y posiciones diversos, contradictorios y opuestos en ciertos casos (aun cuando a veces sosteniendo o postulando intenciones similares o coincidentes); habrá que tomar en cuenta que en un movimiento de la amplitud y profundidad de éste, siempre hay tendencias, siempre hay puntos de coincidencia y de oposición entre los participantes.

2. Las ideas que desencadenaron la Revolución Mexicana y la condujeron a expresarse en leyes e instituciones están principalmente contenidas en el Programa del Partido Liberal, en "La sucesión presidencial en 1910" de Francisco I. Madero, en los planes de San Luis Potosí, Ayala y Guadalupe, y en las ideas y labor gubernativa de Salvador Alvarado.

La evolución de estas ideas y el alcance de lo que podría llamarse el impulso revolucionario, se observa más que en ningún otro documento, en lo asentado en la Constitución de Querétaro, en particular en artículos como el 27, el 123 y el 3º, habiendo también principios que definen y caracterizan a la Revolución Mexicana en los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 15, 28, 30, 39, 73, 83 y 130, y desde luego, en la Constitución en su conjunto.

En las reformas constitucionales, desde 1917 a la fecha, están expresados logros e intenciones de los gobiernos que han regido desde aquellos días; están ahí claras las tendencias coincidentes o continuadoras de las líneas de pensamiento y acción de los revolucionarios, así como aquellas contrarias al espíritu y obra de la Revolución.

Del análisis de estos documentos de la Revolución y de planteamientos enmarcados en esta misma corriente, algunos posteriores a la fase armada, se intentará el desarrollo de un esquema, de planteamientos y objetivos a los que debiera, racionalmente, tender el esfuerzo de quienes se ubican en la línea política que surge y continúa de la Revolución Mexicana.

3. El Programa del Partido Liberal, firmado el 1º de julio de 1906, es, sin duda, el documento anterior al inicio de la Revolución, que presenta el planteamiento más completo de políticas a poner en práctica para encauzar al país por las vías de un desarrollo

democrático, para superar los vicios y desviaciones de la dictadura y el que más influencia tuvo en las ideas y postulados de la Revolución.

El Partido Liberal plantea en primer término, la lucha contra el despotismo. Señala su confianza en el hombre y en su proceder: "Lo que no es más que un principio, lo que no puede decretarse, sino debe estar siempre en la conciencia de los hombres liberales, no figura en el Programa, porque no hay objeto para ello... No se puede decretar que el gobierno sea honrado y justo: tal cosa saldría sobrando, cuando todo el conjunto de las leyes, al definir las atribuciones del gobierno, le señalan con bastante claridad el camino de la honradez; pero para conseguir que el gobierno no se aparte de ese camino, como muchos lo han hecho, sólo hay un medio: la vigilancia del pueblo sobre sus mandatarios".

Para "la implantación de un sistema de gobierno verdaderamente democrático" el Partido Liberal propone, entre otras cosas:

- supresión de la reelección para el presidente y los gobernadores;
- supresión del servicio militar obligatorio y establecimiento de la guardia nacional;
- abolición de la pena de muerte;
- agravar la responsabilidad de los funcionarios públicos, imponiendo severas penas de prisión para los delincuentes;
- multiplicación de escuelas primarias;
- enseñanza netamente laica;
- decretar obligatoria la instrucción hasta la edad de catorce años;
- hacer obligatoria para todas las escuelas de la República, la enseñanza de los rudimentos de artes y oficios y la instrucción militar, y prestar preferentemente atención a la educación cívica;
- prescribir que los extranjeros por el solo hecho de adquirir bienes raíces, pierden su nacionalidad primitiva y se hacen ciudadanos mexicanos;
- los templos se consideran como negocios mercantiles, quedando, por tanto, obligados a llevar contabilidad y pagar

- las contribuciones correspondientes;
- supresión de las escuelas regentadas por el clero;
- jornada de trabajo máxima de 8 horas diarias;
- salario mínimo de un peso diario;
- reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio;
- obligación de patrones o propietarios rurales a dar alojamiento higiénico a los trabajadores;
- obligación de los patrones a pagar por accidentes de trabajo;
- nulidad de las deudas de los jornaleros del campo para con los amos;
- obligación de los arrendadores de campos y casas, a indemnizar a los arrendatarios por las mejoras necesarias que dejen en ellas;
- prohibir el pago a trabajadores de cualquier otro modo que no sea con dinero en efectivo;
- suprimir las tiendas de raya;
- obligatoriedad de los dueños para hacer producir sus tierras, recobrando el Estado las tierras improductivas;
- el Estado dará tierras a quienquiera que lo solicite, sin más condición que dedicarlas a la producción agrícola y la prohibición de venderlas; (de hecho, los derechos ejidales, consagrados en la ley hasta enero de 1934)
- se fijará la extensión máxima que el Estado pueda ceder a una persona;
- creación por el Estado de un banco agrícola;
- supresión de los jefes políticos;
- robustecimiento del poder municipal;
- protección a la raza indígena;
- establecimiento de los lazos de unión con países latinoamericanos.

4. En "La sucesión presidencial en 1910", aparecido en 1908, Francisco I. Madero hace un profundo análisis del régimen porfirista y de su ejercicio del poder, denuncia sus excesos y abusos y

plantea la necesidad de establecer un régimen auténticamente democrático, con la cabal observancia de la Constitución, empezando por la libertad de sufragio y estableciendo la no reelección.

En el Plan de San Luis Potosí, que llama al desconocimiento del gobierno porfirista, los postulados principales son sufragio efectivo y no reelección, ésta de Presidente y Vicepresidente de la República, de gobernadores y presidentes municipales. Señala también que deberán formarse comisiones para dictaminar sobre las responsabilidades en que hubieran podido incurrir funcionarios y que se restituirán los terrenos de "numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas", despojados por la dictadura.

Enarbolando el Plan de San Luis se desencadena el movimiento revolucionario que derroca al régimen de Díaz y lleva a la presidencia a Francisco I. Madero.

La reacción, los restos del viejo régimen, la inmadurez misma de los revolucionarios, el no licenciamiento del Ejército Federal y el licenciamiento de las fuerzas revolucionarias y la intervención norteamericana, encabezada por el embajador Henry Lane Wilson, hacen caer al gobierno de Madero y se instaura la usurpación.

Los intentos reaccionarios de subversión dificultaron la obra gubernativa de Madero durante los quince meses de su gobierno. No se da solución a demandas importantes de sectores que se habían sumado a la Revolución desde los primeros momentos. La desesperación provocada por largos años de opresión, la impaciencia de triunfadores cuyos reclamos no eran atendidos y por lo tanto, injusticias y necesidades que prevalecían, condujeron a la proclamación del Plan de Ayala, suscrito el 28 de noviembre de 1911. En él, se adopta el Plan de San Luis, que se adiciona con las demandas esenciales del agrarismo de la Revolución:

"...entrarán en posesión de estos bienes inmuebles (los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques) desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a estas propiedades, de las cuales han sido despojados..."

"...se expropiarán, previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de

ellas (tierras, montes y aguas), a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor..."

Como reacción a los asesinatos del Presidente Madero y del Vicepresidente Pino Suárez por la usurpación huertista, el 27 de marzo de 1913 se proclama el Plan de Guadalupe, que desconoce a los poderes federales, dando inicio al movimiento constitucionalista, que derrota y derroca al régimen de Victoriano Huerta, se impone sobre las demás facciones revolucionarias y convoca al Congreso constituyente que se reúne en Querétaro, de diciembre de 1916 al 5 de febrero de 1917.

5. Por su alcance, proyección y contenido ideológico, así como por su influencia en la tarea del Constituyente, destacan en el período preconstitucional, los escritos y la obra de gobierno del Gral. Salvador Alvarado, Gobernador de Yucatán, de 1915 a 1918.

Alvarado confió en la solidaridad humana y en el entendimiento entre clases sociales. En "Mi sueño", fechado el 5 de mayo de 1916, escribió: "...nuestra formidable Revolución que respondiendo a los mandatos de la época y llevando en su fuerza la fuerza del progreso, impuso sus tendencias redentoras y no sólo redimió al pobre y al indio, libertándolos de la devoradora tiranía del capital, injusta y legendariamente privilegiado, sino redimió también al capitalista, arrancándolo al fin de la garra sombría y enervante de la tradición".

Y en otra parte, refiriéndose a la hacienda, anotó: "Vencida la efímera crisis de la iniciación, los hacendados llegaron paulatina y casi automáticamente a establecer la explotación de las haciendas en una especie de asociación, en que por una parte entraba el hacendado como capitalista y por otra los trabajadores como industriales. El resultado fue que las condiciones de trabajo y el monto de la producción mejoraron en todos sentidos. El capital y el trabajo, en vez de ir uno contra otro, se sumaban y se engranaban,

llenando así su justa función social y produciendo inmediatamente el éxito".

En esta misma obra planteó la expropiación de terrenos incultos, cuando fueran solicitados por agrupaciones de gente sin tierra; el mutualismo y el seguro forzoso*; la desaparición de cantinas, prostíbulos, corridas de toros, peleas de gallos, loterías y juegos de azar; la supresión de comandantes y jefes políticos y el funcionamiento de los municipios por libre elección popular; el establecimiento del servicio civil; un impuesto único, ligero, sobre la tierra, dividido en dos clases: directo y progresivo, este último sobre la tierra no cultivada.

Señalaba también que la acción oficial, en nuestros medios, tiene que ir supliendo a la iniciativa privada, y que el gobierno, para cubrir sus gastos, explotaría sus recursos naturales propios, como petróleo, cemento, henequén, chicle, madera, etc. y administraría los servicios públicos, como tranvías, luz, agua, teléfonos, líneas de navegación y ferrocarriles.

Algunas de estas ideas las pudo llevar a la práctica al fundar la Compañía para el fomento del Sureste de México y la Comisión reguladora del mercado del henequén; al promulgar el Reglamento de la Ley agraria y las leyes del trabajo, del municipio libre, de catastro y fiscal; al crear las escuelas vocacionales (de comercio, artes y oficios y de artes domésticas), la de agricultura y la hacienda-escuela (para menores abandonados, huérfanos, etc.) y fomentar la República escolar; al organizar la administración de la educación (juntas de educación pública, junta constructiva de educación, juntas populares de educación).

Las ideas y la obra de gobierno de Salvador Alvarado marcaron sin duda, su influencia en las acciones posteriores del constitucionalismo y del movimiento revolucionario en lo general, más que ningunas otras del período preconstitucional.

* "Todos estaban obligados a separar una pequeña parte de su salario para acumular ahorros..."

"Por el Seguro forzoso todos los ciudadanos estaban obligados a tomar pólizas sobre su vida o sobre accidentes, ya por sí, ya por medio de sus patronos..."

6. La síntesis de las ideas revolucionarias, de los anhelos, de las grandes mayorías nacionales que se lanzaron a la lucha, se tiene en la Constitución de Querétaro, promulgada el 5 de febrero de 1917. En ella se delinea el modelo de nación que la Revolución se planteó edificar y desarrollar, modelo que no era, no es estático.

Las ideas de mayor trascendencia política y alcance social están contenidas en los artículos 27, 123 y 3º. En ellos se tiene la definición ideológica y política del Constituyente.

Los logros, avances, desviaciones y retrocesos respecto al modelo de país planteado por la Revolución, están plasmados en los actos de los gobiernos que se han sucedido a partir del 5 de febrero de 1917.

No se pretende en este trabajo hacer el estudio detallado de la obra de los distintos gobiernos de 1917 a la fecha, ni de las modificaciones que ha tenido la Constitución desde su expedición. Si considero que una visión general de la instrumentación del modelo revolucionario o de un modelo contrario a éste, en su esencia y práctica, se desprende del análisis de los cambios sufridos por los artículos 27, 123 y 3º principalmente, por otros artículos también definitorios de la ideología revolucionaria contenida en la Constitución, y que de este análisis de la Constitución, y tomando en cuenta además ideas de otros documentos (declaraciones de principios del PNR, PRM y PRI, Plan Sexenal del PNR, escritos y obra de Lázaro Cárdenas, Narciso Bassols y Jesús Silva Herzog), así como su confrontación con la situación que actualmente vive el país, puede determinarse hasta donde se han introducido en nuestra ley fundamental, las ideas e ideales de la Revolución Mexicana o aquellos de quienes han claudicado o tradicionalmente se han opuesto a ella, así como qué puede o qué debe hacerse para que el desenvolvimiento del país retome los cauces apuntados por la revolución a su propio desarrollo.

7. Artículo 27

Texto original 1917:

"La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de

los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

"Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

"La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de su conservación. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de las latifundios; para el desarrollo de la pequeña propiedad; para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad...

"Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los minerales y substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos... tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides... los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas. Cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos, líquidos o gaseosos..."

Establece también la propiedad de la Nación sobre las aguas en distintas condiciones y calidades y en este caso y en los del párrafo anterior, precisa que "el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y sólo podrán hacerse concesiones por el Gobierno Federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas..."

"La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:

"I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas, aguas o combustibles minerales en la República Mexicana. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes...

"En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta por las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.

"II. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente, por sí o por interpósita persona, entrarán al dominio de la Nación, concediéndose acción popular para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. La prueba de presunciones será bastante para declarar fundada la denuncia..."

Precisa además, que los templos y todo edificio de uso religioso se consideran propiedad de la Nación.

"...VI. Los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población que de hecho y por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren..."

"Se declaran nulas todas las diligencias, disposiciones, resoluciones y operaciones de deslinde, concesión, composición, sentencia, transacción, enajenación o remate que hayan privado total o parcialmente de sus tierras, bosques y aguas a los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población..."

"... el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes para llevar a cabo el fraccionamiento de las grandes propiedades, conforme a

las bases siguientes:

"(a) En cada Estado y territorio se fijará la extensión máxima de tierra de que puede ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida..."

Reformas:

10 de enero de 1934:

En esta fecha el Art. 27 quedó adicionado y en buena parte reordenado, principalmente en lo concerniente a las cuestiones agrarias. Las modificaciones más importantes son las siguientes:

- da derecho a los núcleos de población que carezcan de ejido o que no puedan lograr su restitución por falta de títulos, a ser dotados con terrenos, tierras y aguas suficientes para constituirlos, conforme a las necesidades de su población, precisándose que en ningún caso dejará de concedérseles la extensión que necesiten, debiendo el gobierno, incluso, expropiarla de terrenos inmediatos (fracción X);
- ordena la creación de una dependencia especializada encargada de la aplicación de las leyes agrarias y de su ejecución y establece las bases que rigen las tramitaciones agrarias (fracciones XI, XII y XIII);
- "XIV. Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas, que se hubiesen dictado en favor de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, no tendrán ningún derecho ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio de amparo.
"Los afectados con dotación, tendrán solamente el derecho de acudir al Gobierno Federal para que les sea pagada la indemnización correspondiente. Este derecho deberán ejercitarlo los interesados dentro del plazo de un año... Fenecido este término, ninguna reclamación será admitida".
- protege de afectaciones a la pequeña propiedad agrícola en explotación (fracción XV);

6 de diciembre de 1937:

- adiciona la fracción VII, precisando que son de jurisdicción

federal todas las cuestiones por límites de terrenos comunales.

9 de noviembre de 1940:

- adiciona el párrafo sexto, como sigue: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos".

21 de abril de 1945:

- reforma el párrafo quinto, para precisar la propiedad de las aguas y su aprovechamiento.

12 de febrero de 1947:

Esta reforma de las fracciones X, XIV y XV, fue aprobada por el Congreso el 30 de diciembre de 1946, y publicada en el Diario Oficial el 12 de febrero de 1947.

- la fracción X se adicionó diciendo: "La superficie o unidad individual de dotación no deberá ser en lo sucesivo menor de diez hectáreas de terrenos de riego o de humedad o, a falta de ellos, de sus equivalentes en otras clases de tierras..."
- la fracción XIV fue adicionada como sigue: "Los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos, en explotación, a los que se haya expedido, o en lo futuro se expida, certificado de inafectabilidad, podrán promover el juicio de amparo contra la privación o afectación agraria ilegales de sus tierras o aguas".
- la fracción XV quedó modificada con la siguiente adición: "Se considerará pequeña propiedad agrícola la que no exceda de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras en explotación.
"Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de monte o de agostadero en terrenos áridos.

"Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, las superficies que no excedan de doscientas hectáreas en terrenos de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo; de ciento cincuenta cuando las tierras se dediquen al cultivo del algodón, si reciben riego de avenida fluvial o por bombeo; de trescientas, en explotación, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o árboles frutales.

"Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda de la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad de los terrenos.

"Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad a la que se le haya expedido certificado de inafectabilidad, se mejore la calidad de sus tierras para la explotación agrícola o ganadera de que se trate, tal propiedad no podrá ser objeto de afectaciones agrarias, aun cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados en esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley".

20 de enero de 1960:

- reformó los párrafos cuarto a séptimo de la fracción I para agregar al dominio directo de la nación la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas.

29 de diciembre de 1960:

- adiciona el párrafo sexto para establecer que: "corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones, a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".

4 de febrero de 1975:

- se agrega un nuevo párrafo séptimo que dice: "Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos".

6 de febrero de 1976:

- se adiciona el párrafo sexto para agregar como no concesionables, los aprovechamientos de minerales radiactivos.

6 de febrero de 1976:

- introduce un nuevo párrafo que establece que la Nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción en una zona económica exclusiva, situada fuera del mar territorial y adyacente a éste. Fija a la zona económica exclusiva una extensión de 200 millas náuticas.

28 de diciembre de 1982:

- se agregan las fracciones XIX y XX, que establecen, la primera, que el Estado dispondrá medidas para la pronta y expedita justicia agraria, para garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra; la segunda, que el Estado promoverá condiciones para el desarrollo rural integral y expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

Artículo 123:

Texto original 1917:

- establece la duración de la jornada máxima de trabajo en ocho horas, y de siete horas la nocturna;
- prohíbe las labores insalubres para las mujeres y para los

- menores de diez y seis años;
- establece que por seis días de trabajo, se disfrutará cuando menos de uno de descanso;
- que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y placeres honestos, considerándolo como jefe de familia;
- establece el derecho de los trabajadores a la participación en las utilidades;
- así como la obligación para los patrones de negociaciones agrícolas, industriales o mineras, y de cualquier tipo, dentro de las poblaciones, si ocuparen más de cien trabajadores, para proporcionar a éstos habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual de su valor catastral (fracc. XII);
- establece el derecho de huelga y considera lícitos los paros sólo en los casos de excesos de producción, que hagan ya incosteables los precios.

Reformas:

6 de septiembre de 1929:

- modifica la fracción XXIX dando base para la expedición de la Ley del seguro social, para comprender seguros de invalidez, de vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes y fines análogos.

18 de noviembre de 1942:

- se adicionó el Art. 123 con la fracción XXXI, en la que reserva a la autoridad laboral federal los asuntos relativos a industria textil, eléctrica, cinematográfica, hulera y azucarera, minería, hidrocarburos y ferrocarriles.

5 de diciembre de 1960:

- faculta al Congreso para dictar leyes en materia de trabajo: A. para obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos; y, B. para los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado.

21 de noviembre de 1962:

- reformó, entre otras, la fracción XXXI, agregando a la petroquímica, metalurgia, y siderurgia, abarcando la explotación de minerales básicos, su beneficio y fundición, obtención de hierro metálico y acero, laminados y cemento, como actividades de jurisdicción laboral federal.

9 de febrero de 1972:

- modifica la fracción XII, cambiando la obligación de los patrones de proporcionar vivienda a los trabajadores, para la obligación de cotizar a un fondo nacional de los trabajadores, con el que se establecerá un sistema de financiamiento para otorgar créditos para vivienda a los trabajadores.

19 de diciembre de 1978:

- se adiciona, como párrafo primero de este artículo, lo siguiente: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley".

Artículo 3º:

Texto original 1917:

- establece que la educación es libre, pero será laica la que se dé en establecimientos oficiales, así como la enseñanza primaria, elemental y superior impartida en establecimientos particulares;
- prohíbe a corporaciones religiosas y a ministros de cualquier culto el que establezcan o dirijan escuelas primarias;
- establece la vigilancia oficial para las primarias particulares;
- y que será gratuita la primaria en establecimientos oficiales.

Reformas:

13 de diciembre de 1934:

- "La educación que imparta el Estado será socialista y además

de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social".

- establece además que sólo el Estado impartirá educación primaria, secundaria y normal, pudiendo autorizar a los particulares, si se ajustan a impartir educación socialista, con personal debidamente capacitado y en base a los planes estatales.

30 de diciembre de 1946:

- señala que la educación que imparta el Estado "tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia".
- establece además, que garantizada por la libertad de conciencia, la educación se mantendrá ajena a toda doctrina religiosa;
- precisa que el criterio que oriente la educación será democrático, nacional, en cuanto a que atenderá a la defensa de nuestra independencia política y al aseguramiento de nuestra independencia económica, y contribuirá a la mejor convivencia humana;
- establece que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y grados, pero para la primaria, secundaria y normal y la destinada a los obreros y campesinos, deberán obtener autorización expresa del poder público.
- prohíbe asimismo, para estos tipos de educación, la intervención de corporaciones religiosas, de ministros de los cultos, sociedades por acciones (cuyo objeto sea la enseñanza) y de asociaciones ligadas a la propaganda de cualquier credo religioso;
- señala como obligatoria la educación primaria;
- y como gratuita toda la que imparta el Estado.

18 de marzo de 1980:

- adiciona este artículo, facultando a las universidades e institu-

ciones de educación superior con autonomía y a gobernarse a sí mismas, estableciendo además el respeto a la libertad de cátedra e investigación y al libre examen y discusión de las ideas.

8. Otros artículos, definatorios también de la ideología y el espíritu del Constituyente, y cuyas reformas reflejan cambios fundamentales en la ideología y posición política de los grupos gobernantes, son:

Artículo 5º:

Texto original 1917:

- prohíbe la celebración de todo contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el sacrificio de la libertad del hombre, por causa de trabajo, educación o voto religioso. Prohíbe en consecuencia, el establecimiento de órdenes monásticas.

En los artículos 4º, 6º, 7º y 9º se establecen las libertades de trabajo, manifestación de las ideas, de imprenta y asociación.

El Art. 15 prohíbe la celebración de tratados para al extradición de reos políticos.

Artículo 28:

Texto original 1917

- prohíbe la existencia de monopolios y estancos, salvo los relativos a acuñación de moneda, correos, telégrafos, radiotelegrafía, y emisión de billetes por medio de un solo banco.
- previene el castigo y la persecución por las autoridades a toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario a fin de obtener alza de precios; así como todo acto que evite o tienda a evitar la libre

conurrencia o la competencia, o todo lo que constituya una ventaja exclusiva.

Reformas:

3 de febrero de 1983:

- establece que el servicio público de banca y crédito será prestado exclusivamente por el Estado y que no será objeto de concesión a particulares;
- estipula que podrán fijarse precios máximos a los artículos, materias o productos necesarios a la economía nacional o para el consumo popular, así como imponer modalidades a su distribución;
- adiciona como áreas de exclusividad para el Estado, la comunicación vía satélite, el petróleo y los hidrocarburos, la petroquímica básica, minerales radiactivos, la generación de energía nuclear, la electricidad, los ferrocarriles y las actividades que señalan las leyes expedidas por el Congreso de la Unión;
- así como los organismos y empresas que el Estado requiera para el manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde participe;
- autoriza el otorgamiento de subsidios a actividades prioritarias, siempre que sean de carácter temporal y no afecten las finanzas de la Nación.

Artículo 30:

Texto original 1917:

- da la calidad de mexicanos por naturalización a los indolatinos que se avecinen en la República y manifiesten su deseo de adquirir la nacionalidad mexicana.

Reforma:

18 de enero de 1934:

- suprime la fracción en la que se da calidad de mexicanos por naturalización a los indolatinos que la solicitaren.

Artículo 39:

Texto original 1917:

"La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".

Artículo 73:

Texto original 1917:

Faculta en su fracción VIII al Congreso para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación; para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional.

En la fracción XVIII se dan facultades al Congreso para determinar el valor de la moneda extranjera.

Reformas:

30 de diciembre de 1946:

- se adiciona la fracción VIII, estableciendo que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraen durante alguna emergencia por el Presidente de la República.

17 de noviembre de 1982:

- se modifica la fracción XVIII, facultando al Congreso para dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera.

Artículo 83:

Texto original 1917:

- establece que el Presidente de la República durará en su cargo cuatro años y nunca podrá ser reelecto.
- en los casos de Presidente sustituto o interino, precisa que no podrán ser electos para el período inmediato.

Reformas:

22 de enero de 1927:

- establece que el Presidente de la República "No podrá ser electo para el período inmediato. Pasado éste, podrá desempeñar nuevamente el cargo de Presidente sólo por un período más. Terminando el segundo período de ejercicio, quedará definitivamente incapacitado para ser electo y desempeñar el cargo de Presidente en cualquier tiempo".
- en los casos de quien substituyere al Presidente o el interino, no podrán ser electos para el período inmediato.

24 de enero de 1928:

- aumenta el período presidencial a 6 años y establece que quien se haya desempeñado como Presidente sustituto o interino, no podrá ser electo para el período inmediato.

29 de abril de 1933:

Fija en seis años el período presidencial y precisa que "El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto".

9. De la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 se conforma un proyecto para la nación, con las características siguientes:

- Estado y sociedad democráticos;
- ejercicio pleno e integral de la soberanía nacional;
- facultades del Estado para regular el aprovechamiento de los recursos naturales, con las finalidades primordiales de distribuir equitativamente la riqueza y cuidar de su conservación;
- intervención decidida y creciente del Estado en la vida económica de la nación;
- derecho a la tierra para toda la población campesina que la requiera y puesta de todos los suelos productivos en producción;
- trabajadores protegidos por la ley, con salario suficiente para satisfacer sus necesidades normales de vida, con participación en las utilidades de las negociaciones donde presten sus servicios y vivienda proporcionada por éstas;
- derecho de los trabajadores a la huelga;
- Estado laico;
- educación libre, laica la oficial, y regulada por el Estado también la particular;
- pleno ejercicio a las libertades individuales;
- prohibición a la existencia de monopolios y estancos;
- nación abierta a los latinoamericanos (indolatinos), a los que concede la nacionalidad mexicana si la solicitan;
- pueblo en el que esencial y originalmente reside la soberanía;
- tres poderes, cada uno con facultades específicas y bien definidas;
- prohibición para la reelección del Presidente de la República.

10. Las reformas a la Constitución muestran la ideología y las posiciones políticas de los grupos dominantes.

En el caso del Artículo 27, puede considerarse que todas las reformas, de 1934 a 1983, responden en lo general al espíritu y tendencias que surgen del Constituyente, salvo la del 12 de febrero de 1947 (fecha de su publicación en el Diario Oficial, aprobada

por el Congreso, en definitiva, el 30 de diciembre de 1946), que va francamente en sentido contrario y que ha facilitado, junto con la complacencia de autoridades, la reconstitución de latifundios, los fraccionamientos simulados y obstáculos en general para la aplicación de las leyes agrarias en favor de los campesinos.

De las modificaciones que ha sufrido el Artículo 123, las de 18 de noviembre de 1942 y 21 de noviembre de 1962, fortalecen a la autoridad federal en materia de trabajo, y responden a tendencias centralizadoras.

La reforma de 5 de diciembre de 1960, quita recursos de protección a los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado, al considerarlos como caso de excepción respecto al conjunto de trabajadores.

La modificación a la fracción XII del 123, en base a la cual se creó el Infonavit, liberó a los patrones de una obligación de gran importancia para los trabajadores (la de proporcionarles vivienda en renta, pagando por ella el medio por ciento mensual de su valor catastral), para cuyo cumplimiento quizá pudieron haberse buscado procedimientos que la hicieran descansar no en una cuota, aportada en la práctica por trabajadores y patrones, sino en un apoyo financiero transitorio a estos últimos para el cumplimiento efectivo de su obligación constitucional, abriendo al mismo tiempo posibilidades para la adquisición en propiedad de las viviendas por los trabajadores.

En diciembre de 1934 quedó modificado al Artículo 3º, estableciendo que la educación impartida por el Estado sería socialista. En diciembre de 1946 se modificó de nueva cuenta este artículo, para establecer que el criterio que oriente a la educación será democrático y nacional.

El 18 de enero de 1934 se suprimió la fracción que da calidad de mexicanos por naturalización a los indolatinos que la solicitaren.

El 30 de diciembre de 1946 se adicionó la fracción VIII del Artículo 73 para establecer que los empréstitos que celebre el Ejecutivo (con la debida autorización del Congreso), deberán ser para la ejecución de obras que directamente produzcan un incre-

mento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con finalidades de regulación monetaria, las operaciones de conversión o los que se contraten durante alguna emergencia. Anteriormente sólo se facultaba al Congreso para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo podía celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación y para aprobar estos mismos empréstitos.

El Artículo 83 se modificó, primero (22 de enero de 1927), para permitir que quien hubiera sido electo para desempeñar el cargo de Presidente de la República, pudiera ser electo de nuevo para el mismo puesto dejando pasar un período y que quien se hubiese ya desempeñado como Presidente por dos períodos, nunca más podría ocupar el cargo. Poco después se aumenta el período presidencial de cuatro a seis años, y se prohíbe la reelección para el período inmediato (24 de enero de 1928). El 17 de julio de 1928 es asesinado el Presidente electo Gral. Alvaro Obregón.

En abril de 1933 se modifica de nuevo este artículo, para dejar establecido que quien haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, nunca y en ninguna circunstancia podrá volverlo a desempeñar.

11. Otra serie de documentos que considero de interés analizar, son las declaraciones de principios de los Partidos Nacional Revolucionario (PNR), de la Revolución Mexicana (PRM) y Revolucionario Institucional (PRI), así como el Plan Sexenal, formulado por el PNR para el período 1934-1940, en donde se reflejan claramente las ideologías y las posiciones teóricas con las que han querido mostrarse a la nación los grupos que se han sucedido en el poder.

El análisis de estos documentos es complementario al de los cambios sufridos por la Constitución; en algunos casos muestran con mayor claridad las posiciones políticas formales de quienes han ejercido el poder de 1929 a la fecha.

Declaración de principios del Partido Nacional Revolucionario (20 de enero de 1929):

El PNR acepta en forma absoluta y sin reservas el sistema

democrático y la forma de gobierno que establece la Constitución.

"En el orden de ideas que comprende la lucha de clases velará por el cumplimiento de la leyes que constituyen una garantía de los derechos del proletariado..."

Postula que deberán dedicarse las mayores energías a la reconstrucción nacional, atendiendo en especial la organización económica del país y el saneamiento de las finanzas.

Textualmente dice al respecto: "La política financiera tenderá, fundamentalmente, a dar a la nación una solvencia moral y material, mediante el cumplimiento estricto de sus obligaciones interiores y exteriores, para lo cual ajustará el gobierno sus erogaciones exactamente a la capacidad contributiva del país".

Programa de acción del PNR (20 de enero de 1929):

Considera que la educación debe tener, entre otras finalidades, la de "Fundar y desarrollar en las conciencias el concepto de la preeminencia de los intereses de la colectividad sobre los intereses privados o individuales, menospreciando toda situación de privilegio y creando la necesidad espiritual de una mayor equidad en la distribución de la riqueza".

Declara asimismo, en forma contradictoria, que fomentará la iniciativa privada para la enseñanza.

En materia de desarrollo industrial expone que "deberá procurarse que la instalación de grandes industrias no lleve aparejado el establecimiento de una fuerte corriente de valores hacia el exterior, pues en ese caso los beneficios serán de momento, dejando a la postre la explotación industrial, un saldo contrario a los intereses del país", y que "deberá favorecerse especialmente y de preferencia, la industria a base de capitales mexicanos o extranjeros, radicados en su totalidad en México, de tal manera que la circulación de sus valores se efectúe en ciclos cerrados al interior del país, por ser esta condición la que real y efectivamente realiza el enriquecimiento de la República".

Este Programa postula que la política agraria debe tender a la distribución de la tierra entre los campesinos y a la destrucción del sistema rutinario latifundista.

Establece también que para lograr la liberación de la clase media campesina, deberá proseguirse la política de irrigación, así como acomodar a esta clase mediante programas de colonización.

"A los empresarios agricultores de mayor iniciativa y mayores recursos deberá concedérseles oportunidad y apoyo para que se dediquen al cultivo y pongan en producción mayores extensiones de tierra, cuando ésto no vaya en detrimento de la política agraria..." (Separa a los campesinos, a los que debe entregarse la tierra que se distribuya, de los agricultores a quienes debe establecerse en la zonas un riego, en base a los programas de colonización).

En lo referente al aprovechamiento de recursos naturales, sostiene la intervención del Estado cuando se trate de explotaciones que interesen a la economía nacional o cuando el interés privado lesione el interés público o colectivo.

Dice, por otra parte, que "El equilibrio presupuestal debe considerarse como uno de los fundamentos principales de la política financiera del gobierno, y, por tanto, debe ser establecido con toda firmeza, partiendo de las posibilidades reales de los ingresos para ajustar a ellos los gastos públicos".

Establece además, que el crédito privado debe organizarse bajo la forma de instituciones del progreso social; y que el sistema bancario debe establecerse alrededor de las instituciones centrales, que constituyen el cimiento del crédito social (Banco de México y Banco de crédito agrícola).

Plan sexenal del PNR (5 de diciembre de 1933):

El PNR contrae el compromiso de que se sigan dotando de tierras y aguas a todos los núcleos de población que carezcan de ellas o no las tengan en cantidad bastante para satisfacer sus necesidades, de acuerdo con el artículo 27 Constitucional.

Postula que "Todo individuo tiene derecho al trabajo que le permita satisfacer las necesidades y placeres honestos, como consecuencia de la obligación que la sociedad le impone de contribuir con su esfuerzo al desenvolvimiento colectivo", y que "El Estado intervendrá, directa o indirectamente, a fin de que todo individuo

en la República pueda ejercitar su derecho al trabajo".

Precisa también que "Frente a la lucha de clases inherente al sistema de producción en que vivimos, el Partido y el Gobierno tienen el deber de contribuir al robustecimiento de las organizaciones sindicales de las clases trabajadoras...".

Expresa que el Partido "está cierto de que un arreglo internacional que coordinara las actividades económicas de todos los pueblos y que determinara la obligación de producir de acuerdo con las necesidades de todos y las posibilidades naturales y técnicas de cada cual, organizando al mundo en un sistema de economías regionales, no sólo no competitivas sino complementarias, conducirían a la paz económica y el bienestar de los hombres".

Por otra parte, a fin de regular el aprovechamiento de los recursos naturales y el comercio, cuando signifiquen un empobrecimiento de nuestro territorio, "Se hará efectiva la nacionalización del subsuelo... Se impedirá que las empresas extranjeras continúen acaparando yacimientos minerales".

Establece que el PNR propugnará porque la educación se base en "la doctrina socialista que la Revolución Mexicana sustenta", dándose por otro lado preferencia a la educación rural.

Plantea asimismo, el que se fomentará la repatriación de mexicanos que se hayan ido a trabajar al extranjero, orientándolos hacia su establecimiento en colonias agrícolas.

Declaración de principios y programa del Partido de la Revolución Mexicana (2 de abril de 1938):

El PRM "Reconoce la existencia de la lucha de clases, como fenómeno inherente al régimen capitalista de la producción, y sostiene el derecho que los trabajadores tienen, de contender por el poder político... Las diversas manifestaciones de la lucha de clases, sujetas a los diferentes tiempos de su desarrollo dialéctico, estarán condicionadas por las peculiaridades del medio mexicano.

"Considera como uno de sus objetivos fundamentales la preparación del pueblo para la implantación de una democracia de trabajadores y para llegar al régimen socialista".

El Partido, por otra parte, señala la urgencia de conformar una economía agrícola colectiva.

Considera que el dominio de la técnica es indispensable a los trabajadores para asumir la dirección responsable de la producción industrial. El PRM trabajará, además, por la progresiva nacionalización de la gran industria, como base de la independencia integral de México y de la transformación del régimen social.

Plantea organizar la economía sobre el principio de que la producción y la distribución se orienten hacia la satisfacción de las necesidades populares, estableciéndose un plan de orientación e intervención de la economía.

Declaración de principios y programa del Partido Revolucionario Institucional (21 de enero de 1946):

El PRI reconoce la existencia de la lucha de clases como fenómeno inherente al régimen capitalista de la producción y sostiene el derecho que los trabajadores tienen de contender por el poder político (ya no se habla de la democracia de los trabajadores para llegar al socialismo).

El Partido señala la conveniencia de conformar una economía agrícola colectiva en todos aquellos casos en que sea posible y lo soliciten los interesados y considera indispensable que haya una perfecta armonización de los intereses de campesinos y pequeños agricultores.

Considera, al igual que el PRM, que el dominio de la técnica es indispensable a los trabajadores para asumir la dirección responsable de la producción industrial.

Postula también que procurará la correcta aplicación del artículo 28 Constitucional, con objeto de organizar la economía del país sobre el principio de que la producción y distribución se orienten hacia la satisfacción de las necesidades populares con la mayor libertad posible, pero bajo la supervisión del Estado (ya no en base al establecimiento de un plan de orientación o intervención de la economía).

Respecto a la enseñanza, establece que ésta se orientará con el criterio avanzado y nacionalista del artículo 3o. Constitucional.

Postula que luchará por la liberación económica del país, hasta que desaparezca totalmente su fisonomía semicolonial y que procurará que el artículo 27 y las normas que tiendan a defender las fuentes de la riqueza nacional se apliquen en todo su alcance.

Programa de acción del PRI (7 de febrero de 1953):

Establece que "Nuestra bandera es la de la Revolución Mexicana, nuestro programa la Constitución Política de 1917, y nuestra acción seguirá la trayectoria revolucionaria señalada por el presidente Ruiz Cortines".

Con respecto a la cuestión agraria postula "Que paralelamente a las actividades encaminadas a satisfacer las solicitudes de dotación, restitución y ampliación de ejidos, las autoridades agrarias realicen el deslinde y fraccionamientos de los mismos, la adjudicación de parcelas y la entrega de títulos ejidales, y que la misma atención especial se conceda al despacho de las solicitudes de inafectabilidad de la pequeña propiedad...".

En relación a la intervención estatal en la economía, pugnará porque la intervención del Estado imponga la coordinación indispensable entre comerciantes y consumidores, a efecto de reducir al mínimo las perturbaciones y desajustes ocasionados por la libre competencia.

Con posterioridad a 1953 la declaración de principios y el programa de acción del PRI han sido modificados varias veces. En ellas, al igual que en la de 1953, ya no se hace mención de la lucha de clases, del derecho de todo mexicano al trabajo, el establecimiento de una democracia de los trabajadores para llegar al socialismo, la necesidad de conformar una economía agrícola colectiva, la intervención directa y creciente del Estado en las explotaciones que interesen a la economía nacional o cuando el interés privado lesione al interés público o colectivo, ni de la educación socialista.

Declaración de principios del PRI (septiembre de 1984):

El PRI sostiene que debe orientarse a la nación hacia la justicia

social, que implica luchar por la igualdad formal y real de los mexicanos.

Plantea que la democracia económica se propone corregir desigualdades y propiciar para las mayorías populares el disfrute equitativo del bienestar y las oportunidades. Para alcanzar estos propósitos, el Partido reafirma la rectoría del desarrollo nacional por el Estado, en el marco del sistema de economía mixta.

Postula que apoyará las acciones que tengan por objeto la nacionalización de las industrias y servicios básicos, cuando así lo requiera el interés público; y la subordinación real y efectiva del capital extranjero y del interno "a los objetivos superiores de México". En su programa de acción señala que pugnará por "La inducción al uso responsable y eficiente de los recursos del sector privado, con base en una concepción nacionalista del derecho de propiedad, así como en una gran confianza en el rumbo y las potencialidades de México, para impulsar grandes proyectos económicos y responder a las condiciones que impone el desarrollo con justicia social".

Considera el Partido a las empresas públicas como el fundamento material del Estado para regular y promover la actividad económica en su conjunto y que es necesario se definan formas de participación social en estas empresas, conservando el Estado el control en su conducción y operación.

Reconoce también la función social del sector privado y la conveniencia de alentar su desenvolvimiento.

Se manifiesta por una política económica que fortalezca la oferta y adecúe la demanda, que corrija los desequilibrios sectoriales, impulse un desarrollo regional armónico, reoriente los vínculos comerciales y financieros con el exterior, promueva una distribución justa del ingreso nacional, combata la inflación y fomente empleos permanentes, para avanzar en la conformación de una sociedad cada vez más igualitaria.

El Partido exige que el Estado garantice la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y respecto al amparo agrario, plantea se haga de él una acuciosa revisión legislativa.

Proclama por otro lado, que los beneficios de la tierra deben corresponder a quienes la trabajan; que deben desaparecer los

latifundios y toda nueva forma de concentración de la tierra y acelerarse la entrega de la tierra a quienes tengan derecho a ella.

Plantea que postulado fundamental del PRI es constituir el derecho al trabajo como objetivo superior de la política económica y social.

12. Las declaraciones de principios del PNR, PRM y las múltiples del PRI (de 1946 a 1984) no han correspondido en su integridad, y en muchas épocas ni siquiera a las prioridades de la acción partidaria, ni a las exigencias reales del Partido respecto a la acción gubernamental.

Lo postulado en estos documentos muestra la evolución de la ideología y de lo que en un momento dado se ha considerado viable y/o deseable realizar, así como la postura que los grupos en el poder han considerado teóricamente como ideal, la postura con la que han hecho presencia política ante el país.

Sin duda alguna, la declaración de principios más acorde con los principios y el desarrollo de la ideología de la Revolución Mexicana, es la del PRM, que se plantea como objetivo fundamental de su acción el implantar una democracia de los trabajadores, para llegar más tarde a un régimen socialista.

13. Veremos finalmente, algunas ideas de Lázaro Cárdenas, Narciso Bassols y Jesús Silva Herzog.

Los tres se forman, en distintos ambientes familiares, sociales y de actividad, durante la fase armada de la Revolución. Los tres, en formas diversas, contribuyen a la edificación revolucionaria. Los tres se condujeron con estricta honradez intelectual y en lo material a lo largo de sus vidas. Fueron consecuentes con su origen político, actuaron con base en una ideología conformada por los hombres y las acciones de la Revolución, estudiaron el proceso político, económico y social, lo enriquecieron con sus ideas y actuaciones y trataron de asomarse a un futuro, cuyas bases lucharon por sentar, donde fuesen realidades los ideales de la Revolución y donde ésta pudiese evolucionar hacia formas superiores,

por más justas y más democráticas.

En los tres hay coincidencias que apuntan hacia donde pudiera evolucionar México, después de satisfacerse cabalmente las demandas de la Revolución.

— Lázaro Cárdenas:

(20 de septiembre de 1970): "Las ideas que sustentó sobre el desarrollo político, económico, social y cultural de México y el devenir del mundo no han variado: creo que los principios del socialismo son compatibles con las ideas de la Revolución Mexicana en su ulterior e inevitable desarrollo".

(30 de noviembre de 1934): "Debemos tener presente, por otra parte, la urgencia para conjurar las duras condiciones en que se encuentran los hombres que carecen de trabajo, o que lo tienen con angustiosa irregularidad o con salarios vergonzosos. La única manera de combatir esa irregularidad y esa miseria, es crear nuevas oportunidades de trabajo. Las obras públicas que el gobierno desarrollará intensamente, facilitarán estas oportunidades: pero estarán muy lejos de ser las suficientes para concluir el problema de la desocupación y los bajos salarios.

"Para ayudar a resolver este serio problema, tenemos el reciente programa que aparece en la plataforma del movimiento revolucionario: fomentar y organizar la explotación de nuestros recursos naturales bajo las normas y sistemas de socialización, enunciados claramente en el plan sexenal... Si el trabajo y el entusiasmo de nuestro pueblo se apresta a explotarlas directamente, en colaboración con el gobierno, creando empresas constituidas por organizaciones de trabajadores, vendrá como consecuencia una poderosa economía nacional y la positiva revolución económica y social de México".

— Narciso Bassols:

(8 de mayo de 1925): "...todos estamos conformes en dejar la palabra y trabajar las ideas que, vuelvo a repetirlo, son estas en su fondo: cambiar en el mundo contemporáneo la distribución de los medios de producción -capital, tierra, máquinas, trabajo- organizando la riqueza en forma mejor..."

(29 de noviembre de 1950): "Mientras no haya más problema que el de saber si después de consumada esa transformación violenta (la Revolución Mexicana) viene o no un período distinto, la discusión no tiene trascendencia. Sin embargo, la discrepancia no radica ahí, la discrepancia radica en que con la apariencia de sostener que sólo es revolución el período de lucha armada y de transformación súbita de las leyes, lo que en la realidad política de México viene tratando de obtenerse con la tesis de que la Revolución concluyó y ha muerto ya, es liberar a los gobernantes de la responsabilidad de ser desleales a los principios de la Revolución.

"...no hay un replanteamiento de los problemas nacionales que haga que las grandes metas de la Revolución sean otras y que haya de enderezarse el movimiento para pensar en la aparición de uno nuevo.

"Y menos aún puede admitirse la tesis de que por el hecho de que los gobernantes constituyan una oligarquía que desdeña sus deberes revolucionarios, la Revolución ha muerto, porque, señores, la Revolución no es el gobierno, la Revolución no es el grado de lealtad o de entusiasmo o de energía con que los gobernantes cumplan el programa; antes de los gobernantes, como imperativo de ellos, por encima de ellos están los grandes principios, las metas, las fuerzas motrices de las aspiraciones de la Revolución. No se determina la vigencia de una Revolución por lo que el gobierno hace o deja de hacer, sino en todo caso eso sólo ha de servir para saber si el gobierno es leal a sus compro-

misos originales o si ha faltado a los deberes que contrajo cuando conquistó el poder inicialmente.

"...no es por fortuna la vida de la Revolución medida por la lealtad de los funcionarios, transitorios por necesidad. La validez de los postulados revolucionarios está determinada por su relación con los problemas nacionales y con las aspiraciones del pueblo; y... mientras no se cumpla un ciclo histórico cuya duración no cabe anticipar a estas horas, que venga a plantear la posibilidad de una nueva revolución para lograr metas de las que no voy a ocuparme en este instante, que no es por cierto la posibilidad de hoy, la Revolución como conjunto de postulados, como expresión de las necesidades del pueblo, como conjunto de metas a alcanzar, está en pie".

(29 de noviembre de 1950): "...yo no voy a afirmar aquí que debemos realizar hoy o mañana la revolución proletaria. Para que llegue el momento de la revolución proletaria es indispensable desarrollar, llevar a su término los postulados actuales de la Revolución Mexicana".

— Jesús Silva Herzog:

(diciembre de 1938): "El capitalismo cubre un corto número de siglos en la historia, sería absurdo creer que la humanidad, una humanidad cuyo desarrollo apenas comienza, ha encontrado ya sus moldes definitivos; sería absurdo creer que en un mundo en que todo cambia sólo pudiera existir una cosa que no cambie: la organización capitalista. El capitalismo, tenemos a ese respecto la más completa y honda convicción, dejará de ser; nació del desarrollo de la técnica aplicada a la producción y morirá como resultado del desarrollo de esa misma técnica; más todavía, está muriendo ya, su agonía no puede medirse dentro del corto espacio en que se mide la agonía de un hombre, la agonía del capitalismo puede durar no sabemos si tres, cinco o siete décadas; pero el capitalismo

tendrá que ser sustituido por el sistema que imponga el porvenir, y este sistema es el socialismo".

(enero de 1960): "...instaurar en cada país de la América Latina la democracia social, una democracia igualitaria en lo político y justiciera en lo económico; una democracia tendiente a hacer desaparecer las irritantes y monstruosas desigualdades existentes; que nivele, que acerque hasta donde es compatible con la naturaleza humana, el nivel de vida económico y cultural de los ciudadanos, dando a todos las mismas oportunidades de realizarse plenamente. Esta democracia social, como primera etapa para después llevar a cabo nuevas conquistas... "El progreso científico y el desarrollo de la técnica descubrirán rumbos nuevos y nuevos y dilatados horizontes. ¿Será el socialismo o una organización semejante no diseñada por los teóricos de las diferentes doctrinas? No lo sabemos con certeza; no está en nuestra mano descorder el velo espeso que oculta el porvenir".

14. Lázaro Cárdenas, Narciso Bassols y Jesús Silva Herzog son, en la época de ascenso de la Revolución Mexicana y aun en la posterior de desviaciones y rectificaciones, por sus actitudes y participaciones políticas y por su pensamiento, tres destacados hombres de la Revolución, conscientes de su responsabilidad personal y de las derivadas de su actuación en diferentes regímenes gubernamentales, que con valor y claridad plantearon el rumbo que debiera seguir el desenvolvimiento del país, para llegar a hacer realidades las ideas y principios de la Revolución Mexicana.

Visto el curso seguido por el desarrollo de México, hasta 1959 por Bassols, hasta 1970 por Cárdenas y hasta 1984 por Silva Herzog, los tres, en distintos momentos, coincidieron en plantear que para llegar a formas mejores de organización política, económica y social, para acceder al socialismo, compatible "con las ideas de la Revolución Mexicana en su ulterior e inevitable desarrollo" como dijera Cárdenas, "o a una organización semejante

no diseñada por los teóricos de las diferentes doctrinas", como dijera Silva Herzog, es preciso, en primer término, que se alcancen las metas de la Revolución Mexicana. Es esta, la condición primera para que pueda pensarse, con objetividad, que nuestra sociedad y nuestra nación adopten formas más evolucionadas de organización política y económica; más evolucionadas por más justas, equitativas y democráticas.

15. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos por alcanzar, por establecer e imponer en nuestra realidad y en nuestras prácticas, para dar cumplimiento al compromiso histórico de la Revolución Mexicana?

Haciendo una síntesis, necesariamente incompleta, la Revolución desde su inicio y en su desenvolvimiento, se planteó lograr la creación, establecimiento y/o desarrollo de:

- una sociedad democrática, en lo político, económico y social, con oportunidades de mejoramiento y superación para todos;
- respeto y efectividad del sufragio; no reelección para el Presidente de la República y los gobernadores;
- una nación cabalmente soberana e independiente;
- distribución equitativa de la riqueza entre el conjunto de la población y las distintas regiones del país;
- una estructura agraria donde coexistan el ejido, la comunidad indígena y la pequeña propiedad en producción, con todas sus tierras aprovechadas y con la productividad óptima; el ejido, y en particular el ejido organizado colectivamente, como eje y motor principal de la economía rural, organizado democráticamente y constituyendo el sustento político en el campo, del régimen revolucionario;
- sistema de planeación para orientar e intervenir en la economía;
- una economía de pleno empleo; derecho al trabajo para todos los mexicanos, y la posibilidad de ejercitarlo;
- régimen de seguridad y servicios sociales que dé

- protección integral a todos los trabajadores;
- trabajadores con derechos a la huelga, a un salario remunerativo, a la vivienda, con participación efectiva de las utilidades de las empresas, debidamente garantizados en la ley y en la práctica;
- trabajadores organizados, con sindicatos independientes, democráticamente estructurados, como apoyo político fundamental del régimen revolucionario, debidamente coordinados en este aspecto con el campesino organizado y con los demás sectores incorporados políticamente a la línea revolucionaria;
- Estado laico;
- una educación sustentada en los criterios de la Revolución Mexicana, sin concesiones ni desviaciones en este aspecto, como base para ir creando unidad en la formación ideológica de niños y jóvenes de distintas extracciones sociales, entendiendo claramente que la acción educativa es sólo uno de los muchos frentes en los que debe actuarse para lograr la evolución política, social y económica de un sistema;
- incorporación de las poblaciones indígenas al desarrollo nacional, con el respeto a sus valores y peculiaridades;
- desarrollo educativo, cultural, científico y tecnológico independiente, que dé respuesta, en primer término, a los requerimientos nacionales;
- industrias y servicios básicos desarrollados por el Estado, por sí o en asociación con los trabajadores;
- aprovechamiento de los recursos naturales básicos por el Estado y para desarrollo y beneficio nacionales; fortalecimiento de las industrias en las que participa el Estado, mediante su integración, expansión, modernización y diversificación (casos de las industrias petrolera, petroquímica básica y derivada, fertilizantes, siderurgia, minerales radiactivos y nuclear, etc.);
- economía mixta;
- desarrollo industrial sin efectos descapitalizadores; control

- de la inversión extranjera;
- finanzas públicas sanas; presupuestos gubernamentales formulados en función de los ingresos;
- formas cooperativas de participación y gestión industrial-empresarial de los trabajadores; aumento de la importancia relativa de estas formas de organización en el conjunto de la economía;
- ejercicio de la autodeterminación; cooperación internacional sobre bases de equidad; solución pacífica de los conflictos internacionales; acercamiento y mayor colaboración con las naciones latinoamericanas.

Son éstas las características principales del modelo de nación delineado por los logros y el desenvolvimiento en el tiempo de la Revolución Mexicana. Su establecimiento en la práctica, dependerá de la acción y capacidad de realización de las fuerzas políticas afines con su ideología y proyección.

BIBLIOGRAFIA

- Manuel González Ramírez, "Planes políticos y otros documentos". SRA. CEHAM, 1981.
- Francisco I. Madero, "La sucesión presidencial en 1910". Ediciones Selectas. México, D.F.
- Salvador Alvarado, "Carta al pueblo de Yucatán" y "Mi sueño". Editorial Injumex. México. 1955.
- XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, "Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones". 1967.
- "Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos". Investigación, recopilación y dirección general: Raúl Rosas Navarrete. Edición del Gobierno de Puebla. 1983.
- "Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos". Editorial Trillas. México. Segunda reimpresión 1984.
- "Historia documental del Partido de la Revolución". Partido Revolucionario Institucional. Instituto de capacitación política. México. 1981-1982. Tomos I, II, III, V y VI.
- Declaración de principios, Programa de acción y Estatutos del Partido Revolucionario Institucional. México. 1984.
- Lázaro Cárdenas, "Palabras y documentos públicos 1928-1970". Siglo XXI Editores. Tomos I y III. México. 1978.
- Narciso Bassols, "Obras". Fondo de cultura económica. México. 1964.
- Jesús Silva Herzog, "Inquietud sin tregua". Colegio nacional de economistas. México. 1972.